

Serie Documentos de Trabajo del IIEP

Nº 12 - Septiembre de 2016

LAS IDEAS Y LOS PROYECTOS DE LA
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN LA
REVOLUCIÓN ARGENTINA (1969-1973)

Aníbal Pablo **Jáuregui**



Instituto Interdisciplinario de
Economía Política de Buenos Aires
(IIEP-BAIRES)

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires
Av. Córdoba 2122 - 2º piso (C1120 AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 5285-6578

<http://iiep-baires.econ.uba.ar/>

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 5983-1420

<http://www.conicet.gov.ar/>

ISSN 2451-5728

Los Documentos de Trabajo del IIEP reflejan avances de investigaciones realizadas en el Instituto y se publican con acuerdo de la Comisión de Publicaciones. L@s autor@s son responsables de las opiniones expresadas en los documentos.
Desarrollo editorial: Lic. María Fernanda Domínguez - Ed. Hebe Dato

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP-BAIRES) reconoce a los autores de los artículos de la Serie de Documentos de Trabajo del IIEP la propiedad de sus derechos patrimoniales para disponer de su obra, publicarla, traducirla, adaptarla y reproducirla en cualquier forma. (Según el art. 2, Ley 11.723).



Esta es una obra bajo Licencia Creative Commons
Se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

LAS IDEAS Y LOS PROYECTOS DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN LA REVOLUCIÓN ARGENTINA (1969-1973)

ANÍBAL PABLO JÁUREGUI

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA DE BUENOS AIRES - IIEP-BAIRES (UBA - CONICET)
JAUREG@SINECTIS.COM.AR

ABSTRACT

The bureaucratic authoritarian regimes of the 1960s were designed according to their inspirers to solve the economic bottlenecks suffered by the region. Arrange, plan, organize were the usual verbs of a political system based on the nullification of the autonomous demands of the civil society. The dictatorial "Revolución Argentina" had a pronounced planning sketch outlined at the very beginning of its existence but with a very partial implementation in the initial years. After the Cordobazo showed that the authoritarian dream was more illusory than real, in the 1970 the bias toward planning deepened. The development plans were conceived as a mechanism for public action of strong techno-bureaucratic content. In this way it could consolidate national capitalism with improvements in the distribution of social and regional wealth, even after an eventual political solution.

RESUMEN

Los regímenes burocráticos autoritarios de la década de 1960 estaban diseñados según sus inspiradores para resolver los estrangulamientos de las economías de la región. Ordenar, planificar, organizar eran los verbos usuales de un sistema basado en la anulación de las demandas autónomas de la sociedad. Así fue como el régimen de la "Revolución Argentina" tuvo un marcado bosquejo planificador que se esbozó en los comienzos mismos de su existencia pero que se plasmaría muy parcialmente en los años iniciales. En 1970 después del Cordobazo que mostraba que el sueño autoritario era más ilusorio de lo pensado, el sesgo hacia la planificación se acentuó. Los planes de desarrollo fueron concebidos como un mecanismo de acción pública de fuerte contenido tecno-burocrático con la expectativa de que pudiera afianzarse un capitalismo nacional, que reconstruyera los desequilibrios regionales, aun después de una eventual salida política.

Keywords: Authoritarianism, Plan-Entrepreneurs, Region

JEL Codes: N16, N26, N46, O21

Introducción.....	2
La planificación en la formulación de la política económica del régimen.....	4
El primer ensayo de planificación de 1970.....	7
El giro nacionalista de la Revolución Argentina.....	9
El segundo ensayo en 1970.....	11
La planificación regional y sus problemas.....	14
Conclusiones.....	17
Bibliografía.....	18

Las ideas y los proyectos de la planificación económica en la Revolución Argentina (1969-1973)

Introducción

El período que transcurre entre 1950 y mediados de la década de 1970 estuvo dominado por “la planificación”, (especialmente la económica) entendida como una técnica destinada a la racionalización del proceso de toma de decisiones en las políticas públicas¹. Un buen ejemplo de la forma en que este paradigma operaba estuvo representado por el régimen de la Revolución Argentina, entronizado en junio de 1966, que lo incorporó como instrumento de implementación de sus objetivos.

Vista en perspectiva histórica, la planificación económica resultó una forma de encarar la resolución de los desafíos, inspirada en el modelo soviético y en la “economía del desarrollo” y que fuera formulaba por la Comisión Económica para América Latina como parte de una teoría latinoamericana del desarrollo. La Conferencia de Punta del Este de 1961 y la consiguiente formalización de la Alianza para el Progreso contemplaban explícitamente la elaboración de planes con el asesoramiento de un comité de expertos para asegurar el crecimiento sostenido de las economías de la Región con el beneficio del auxilio externo.

En la Argentina, estas ideas fueron tomadas por el gobierno constitucional del presidente Illia que a través del CONADE concretó el “Plan Nacional de Desarrollo” de 1965, un bien construido programa de crecimiento económico y social que no se pudo poner en práctica por el golpe de Estado de junio de 1966. El régimen encabezado por Onganía, a pesar de su ataque al sistema constitucional, mantuvo la orientación favorable a la planificación pre-existente aunque bajo otro patrón. Su gobierno buscaba poner en marcha un modelo político que combinara la conquista del orden social, el desarrollo entendido como eficiencia tecnocrática y el paternalismo excluyente en relación a las clases populares. Este conjunto de aspectos fueron resumidos teóricamente por O’Donnell con el conocido concepto de Estado

¹ Así, entre muchos otros casos, que reflejan la universalidad de la convicción en relación a la necesidad de usar planes, el primer ministro indio entre 1947-1964, el Pandit Nehru, confesaba a André Malraux que el naciente Estado indio se inspiraba en la planificación soviética, especialmente de las regiones atrasadas del Asia Central, para aplicarlo tanto a la resolución de sus problemas alimenticios como para impulsar su industria. (Malraux 1968, p. 190).

Burocrático Autoritario, que se ajustaba perfectamente a la planificación de las políticas económicas y sociales ligadas a la búsqueda del control social.

Prueba de ello, fueron los discursos de Onganía que machacaban en el tópico del restablecimiento de la primacía del Estado, en el desarrollo económico y en el asistencialismo hacia los sectores populares. Esta combinación presente en los primeros meses de vida del nuevo régimen dificultaría la aplicación de políticas más decididamente estabilizadoras durante el mandato de Néstor Salimei como jefe del Palacio de Hacienda. Pero con su desplazamiento y la llegada de Adalberto Krieger Vasena a la cartera económica en los últimos días de 1966 se impuso un “tiempo económico” mucho más definido que no excluía el plan de largo plazo.

El modelo planificador fue retomado con mayor decisión en 1970-1971 cuando se comenzaron a propiciar políticas de largo plazo en momentos en que el régimen estaba siendo sacudido por una oleada de agitación social. La indagación central que nos hacemos en este trabajo bucea en las razones que explican la emergencia en ese instante de una planificación económica. Nuestra respuesta a esa pregunta consiste en considerar a esos planes como el instrumento de un tránsito, que permitiera ampliar la participación social sin abandonar los objetivos de control social del régimen. La elaboración de programas que fueran “políticas de Estado” permitiría acordar con las corporaciones, sindicales y empresarias, las condiciones de un proceso de ampliación de la base económica capitalizando al empresariado nacional, con expansión geográfica del producto y con un aumento del ingreso real de las clases populares.

Más allá de limitaciones y dificultades del contexto político, lo cierto es que las propuestas allí desarrolladas representaron un mayor contenido técnico y una ampliación de las metas nacionales. Sin embargo, el éxito fue dificultado por las vicisitudes políticas de aquellos años turbulentos. A esta cuestión coyuntural se sumaba un problema de diseño que tenía este modelo de planificación autoritaria y que estaba representada por la figura ideal del “planificador omnisciente”. Para este personaje modélico, las relaciones que se proyectaban en la planificación se ordenaban a través de procesos sucedidos en el interior de su mente. A los actores se asignaban roles que debían seguir según la ruta trazada por el planificador hacía aquel destino que mejor interpreta el interés colectivo. Toda desviación pasaba a ser considerada una anormalidad. Al igual que la mano invisible de la economía clásica, proporcionaba un mecanismo de control social que permitía regular la asignación de valores en la sociedad, a través de la neutralidad valorativa, racionalidad sustantiva y certidumbres otorgadas por el propio plan, buscando mediante recursos mistificadores legitimar un orden social diferente al prescripto. Pretendía utilizar criterios técnicos donde aparecían el conflicto, la negociación y el compromiso. Daba por sentada la funcionalidad de una burocracia que alterada en su dinámica, ofrecería resistencias (Ozlak, 1980). El autoritarismo como política y como modelo de gestión mostraba así sus limitaciones

La planificación en la formulación de la política económica del régimen

Como se ha visto, el recién instalado régimen militar se propuso crear mecanismos de funcionamiento burocrático moderno que tuvieran por fin un planeamiento general de las políticas públicas. En 1966 confeccionó el cronograma a través del cual el mismo gobierno produciría su propia planeación. Su primera manifestación fue el denominado “Programa de Ordenamiento y Transformación” que estipulaba objetivos poco cuantificables de orden genérico ligados al orden autoridad, responsabilidad y disciplina. Allí se incluían como objetivos asequibles, la obtención de la comunidad espiritual en la población, la racionalización integral, la solución de problemas urgentes y la adopción de medidas para desarrollo efectivo en otras etapas². A ello se le agregaban la incorporación de elementos estadísticos que permitían la generación de insumos necesarios para la afinación objetivos, métodos y controles (González Bollo, 2016).

Para el año 1967 se contemplaba la adaptación de la estructuras para satisfacer las exigencias de los objetivos establecidos en los documentos iniciales. La idea del desarrollo integral otorgaba mayor valor a una perspectiva planificadora en cuanto a que se buscaba que el proceso social no se descontrolara. El segundo paso se realizaría en 1967 con el primer esbozo del “Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad” que debería haberse comenzado a ejecutar en 1968 y que ya contemplaba la inclusión de instrumentos y objetivos más económicos y técnicos. La inflación era interpretada en forma estructuralista como el fruto de la lucha entre precios y salarios. En el terreno social, se abogaba por la independencia ideológica y política de los sindicatos obreros junto a la libertad de afiliación, lo que suponía una preferencia por el pluralismo sindical aunque organicista. Esta misma impronta se advierte para las organizaciones de los empresarios cuyos deberes y derechos debían definirse al igual que las obreras, convergiendo en el objetivo común de impedir que se obstruyera la producción con medidas de fuerza y se eliminaran las prácticas que afectaran la productividad.

Más allá de estas mudanzas estructurales, el régimen de funcionamiento de la economía (su “tiempo económico”) recién fue establecido con la asunción como Ministro de Economía y Trabajo, Adalberto Krieger Vasena a fines de 1966 y con el anuncio del “Plan de

² De acuerdo a Onganía, el desarrollo “...no debe verse a través de una perspectiva unilateral que atienda solamente aspectos de orden técnico y económico y relegue a segundo plano los problemas sociales, culturales y de realización espiritual... El planeamiento será tan completo y detallado como sea preciso, pero nos aseguraremos que mantenga las condiciones de flexibilidad que permitan adecuarlo a los problemas...” (Onganía, 1967, pp. 16-30)

Estabilización y Desarrollo” en marzo de 1967³. Este programa no era ajeno a las experiencias de reconstrucción europeas de post-guerra y se fortaleció con los lazos tendidos hacia el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El programa cambiario de macrodevaluación compensada se completaba con una política de ingresos que congelaba salarios por dos años y contenía la inflación con acuerdos con los sectores formadores de precios. Una serie de premios y castigos fiscales y crediticios completaban la ingeniería del plan que debía incrementar las exportaciones, especialmente las industriales para asegurar que el colchón devaluatorio funcionara. Los resultados de este programa a dos años de su inicio fueron reconocidamente positivos aunque la sensación social no coincidía con los indicadores⁴.

En ese momento se hicieron presentes los problemas de legalidad y legitimidad políticas que son inherentes a cualquier régimen incluso también los constitucionales aunque se agravaban en los que no lo era y que en la Argentina se tramitaba de una forma impar desde la Revolución de 1930. Parte de esta particularidad quedó reflejada en el hecho de que no hubo mayores manifestaciones de rechazo al golpe de junio de 1966, cuando la ciudadanía con su pasividad abría un crédito a la nueva situación. Ese crédito comenzó a resquebrajarse desde mediados de 1968, cuando una sucesión de manifestaciones, protagonizadas por estudiantes y trabajadores expresaba públicamente un malestar económico y político que tuvo su punto culminante en el Cordobazo de mayo de 1969. Este episodio, además de generar un alerta sobre la capacidad gubernamental de mantener el orden, agravó las diferencias políticas al interior del régimen entre paternalistas, liberales y nacionalistas. Si bien la agitación social no puede disociarse del conflicto de largo plazo entre el peronismo y el antiperonismo, existía una lectura de esos conflictos como epifenómenos de tensiones en la infraestructura socioeconómica y como reverberaciones de la Guerra Fría. La protesta debilitaba al sector denominado liberal y fortalecía al sector nacionalista y paternalista que en buena medida coincidía con el estructuralismo económico que dominaba la academia y que desconfiaba de las soluciones meramente políticas.

¿O acaso la irrupción de la violencia popular era la única causa de la salida del ministro Krieger Vasena? ¿Se debió a las inconsistencias del programa que el Cordobazo vino a rematar? ¿No había sido el equipo económico demasiado permeable según a los intereses de

³ Krieger fue asesorado por un conjunto de economistas de diversos signos, desde el liberal católico Carlos Moyano Llerena hasta los equipos más heterodoxos del CONADE, entre los que estaba Federico Herschel, quien fuera uno de los encargados del manejo fiscal.

⁴ En parte el empresariado nacional percibía que la macro-devaluación compensada que había sido eje del programa facilitaba la transferencia de activos a manos de empresas transnacionales. El sector exportador, que había cargado con el peso fiscal a través de las retenciones, evidenciaba las consecuencias de un régimen de tipo de cambio fijo y reclamaba la disminución de la presión fiscal. La baja de los ingresos por exportaciones traía de nuevo la amenaza de la restricción externa a pesar del apoyo obtenido en los organismos internacionales. Con vistas a los resultados, el gobierno se negó a solicitar al FMI un nuevo *stand by*. Esta decisión provenía además de ciertas diferencias existentes con el organismo internacional que no concordaba la política monetaria poco ortodoxa del gobierno y consideraba insuficiente la racionalización del sector público y la apertura de la economía. (García Heras, 2008, pp. 174-175.)

las corporaciones empresarias y a la lógica del mercado? ¿No habría llegado el momento de adoptar un programa económico que quebrara las barreras del estancamiento y contuviera las demandas de una mayor participación en el ingreso de los asalariados? ¿No sería necesario abrir el juego a una mayor participación de los empresarios nacionales?

Estas preguntas no eran respondidas en forma categórica e inmediata pero son sintomáticas del clima de incertidumbre y de debate entre técnicos, funcionarios y jefes militares, tanto en relación a las políticas económicas y sociales como a sus previsiones políticas. El estado deliberativo en buena medida se trasladaba a la elite económica que comenzaba a ver con preocupación al porvenir inmediato.

Todo ello resonaba el campo de la izquierda y del peronismo combativo en los que existía una sensación que podría estar en gestación una réplica del camino revolucionario cubano. Esta amenaza era un estímulo implícito a la búsqueda de acuerdos políticos que permitieran abrir la puerta a una nueva etapa de desarrollo capitalista que modificara la estructura productiva sectorial y regional. Había llegado para ellos el momento de encarar un programa económico y social de envergadura, que recogiera toda la herencia teórica de la “economía del desarrollo” y el cepalismo para ponerlo al servicio de un modelo nacional exitoso de industrialización y progreso. El ya mencionado estructuralismo otorgaba una base teórica para abordar la estabilización con base en un crecimiento que limitara tensiones y conflictos sociales.

La aplicación de un plan de largo plazo había quedado postergada a la estabilización. A ello contribuyó la sensación de “crisis de la planificación” que merodeaba la región y que estuvo evidenciada en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), principal organismo especializado en el tema, y que funcionaba en Santiago como dependencia de la CEPAL. De acuerdo a los técnicos que allí revistaban, a medida que los planes sólo se llevaban parcialmente a la práctica, la planificación perdía interés político. Las cuestiones más acuciantes eran definidas fuera de las oficinas encargadas de planificar y se tenía la sensación que se entraba en el terreno de una utopía. Se imponía pues una reducción de la totalidad planificable a una “parcialidad aprehensible, y por lo tanto, más manejable y sujeta a control”. La interdependencia de los fenómenos económicos y sociales obligaba a una formulación necesariamente global que incluía de un lado, la planificación sectorial y por la otra, un instrumental de aproximaciones sucesivas de la política económica a los objetivos del plan (Martner y Máttar, 1968, p. 119).

El año 1970 se transformó en el momento de decisión de un posible renacimiento del proyecto autoritario que no descartaba alguna forma de retorno al orden constitucional. Entre otros objetivos de largo plazo la necesidad de quebrar la restricción estrena sobre la

base del incremento de las exportaciones especialmente las industriales⁵. Además, tras la desnacionalización percibida en la década de 1960, se postulaba el fortalecimiento de un capitalismo nacional eficiente que tuviera como eje a las empresas locales.

El estado deliberativo al interior del régimen pudo observarse en la convocatoria de una reunión de economistas y técnicos, integrantes del Consejo de Asesores del gobierno, en el Comando en Jefe del Ejército el 15 de junio de 1970 donde predominaba la certeza que los tiempos se estaban acelerando y que debería ponerse en vigencia un plan que enlazara la Revolución con el país del futuro. Estuvieron allí entre otros: R. Alemann, Elvio Baldinelli, Tomás Anchorena, Luis García Martínez, el próximo ministro de Economía Moyano Llerena, el ministro de Economía Dagnino Pastore, el general desarrollista Juan Enrique Guglielmelli, García Belsunce y el Brigadier Cacciatore. La discusión pasaba esencialmente por la compatibilización de la estabilidad con el cambio de la política de ingresos para permitir la integración de los sectores asalariados.

El primer ensayo de planificación de 1970

En los últimos meses del gobierno de Onganía comenzaba a gestarse el Plan que se había prometido en 1966 y que se publicaría cuando era Ministro de Economía, Dagnino Pastore, ex director del CONADE⁶.

El nuevo programa, el “Plan Nacional de Desarrollo” de 1970-1974 (en verdad la idea original era quinquenal 1969-1974 pero el retraso en su redacción lo convirtió de hecho en cuatrienal), fue concebido con una mirada crítica en relación al programa del ex-ministro Krieger, aunque buscaba legitimarse en los documentos liminares del régimen militar del que se presentaba como continuidad. Tenía un diagnóstico negativo de la evolución económica reciente, tanto de la participación de las empresas de capital extranjero como de la relación con los organismos multilaterales de crédito⁷. El crecimiento del período 1960-

⁵ Ya en ese momento M. Diamand que tendría una destacada actuación posterior como empresario, líder corporativo e integrante de diversas comisiones asesoras, postulaba la necesidad de reconocer la importancia del efecto negativo que sobre la economía tenía el peso de las exportaciones primarias. Proponía como una medida esencial la incorporación de tipos de cambios múltiples que reconocieran las diversas rentabilidades que operaban en el sector agrario e industrial para favorecer a éste último. (M. Diamand, 1973).

⁶ Este había quedado en manos de Eduardo Zalduendo. Para la elaboración del Plan fueron destinados el Subsecretario Héctor Diéguez, Adolfo Canitrot, a cargo del área de Planeamiento y Alberto Petrecolla que era asesor.

⁷ En su análisis sobre la historia económica reciente se advertía esta mirada crítica. Desde el punto de vista estrictamente económico, el desarrollo del período precedente había sido dominado por la gran empresa que se había constituido en el eje del dinamismo económico. Ello se advertía en las industrias capital-intensivas en las ramas de industrias básicas, de bienes de capital, bienes durables de consumo y conexos en las que predominarían las firmas extranjeras. Algo similar había sucedido en el sector agrario que conocía desde 1967 una notable transformación tecnológica en la región pampeana. Como consecuencia de esta estrategia declinó la participación de la empresa nacional en la economía, declinación facilitada por la devaluación de 1967. Esta situación derivó en un dualismo visible tanto en el sector industrial como en el agrario que facilitó el retraso salarial en aquellos sectores más tradicionales de la economía que, por supuesto, eran mano de obra intensivos. Este crecimiento desbalanceado, un diagnóstico claramente influido por Diamand, dificultaba la adopción de

1969 había incrementado la productividad y la producción en la industria y el agro a costa de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso y de la empresa nacional en la distribución del producto. La baja del salario estaba relacionada con la dinámica establecida entre la inflación y la devaluación de la moneda nacional. Las diferencias de productividad entre sectores fue el responsable de un dualismo que se reproducía a nivel industrial, agrario (que se extiende a lo regional) y laboral que el plan se proponía superar. Este desarrollo desbalanceado imposibilitaba una mayor difusión de los beneficios del crecimiento.

La metodología del plan proyectaba las posibilidades de crecimiento de cada sector, a través de los analistas sectoriales, y determinaba a partir de allí las políticas congruentes con las metas previstas. Luego, se agregaban los resultados sectoriales para hacerlos compatibles con el balance externo, los flujos de inversión, el nivel de ocupación y la oferta global de bienes y servicios. De aquí surgían las estrategias de acción y las consiguientes recomendaciones de política económica, arribándose a la cuantificación, tanto de los objetivos como de los medios.

El plan proponía un crecimiento de alrededor de 5.5% del producto, una tasa que superaba con amplitud el promedio 1950-1969 de un 3,3%. Ese valor resultaba lógico para la dinámica económica del momento cuando el PBI crecía por encima del 6%, buscando evitar la alternancia cíclica. Por lo demás, se consideraba que esa tasa era apta para responder a las crecientes demandas sociales y propender rápidamente a la distribución del mayor ingreso generado. Las tasas de crecimiento más bajas de lo previsto implicaban la imposibilidad de absorber la mano de obra existente, es decir que un 4% anual de suba del PBI era la única forma de mantener el nivel de desocupación vigente. La desocupación que estaba en un 5.6% debería bajar al 3.3%, considerado friccional⁸.

Los tres objetivos trazados apuntaban a los fines normales de toda política económica el crecimiento del producto y la distribución del ingreso junto con el afianzamiento de la soberanía nacional en el campo económico, ligado a cierta influencia "dependentista". Para los redactores del plan, las principales limitaciones para el crecimiento económico provenían tanto de la restricción externa (las exportaciones de bienes debían tener un ritmo de crecimiento del orden del 6.7% anual acumulativo), como de la insuficiencia de la inversión.

estrategias de acumulación, ya que favorecer la inversión de la empresa nacional requería incrementar la capacidad de ahorro del sector no asalariado, un objetivo que se contradecía con la necesidad de impulsar la capacidad del mercado interno. Por lo tanto, la planificación se hacía necesaria para que los objetivos no se neutralizaran en su espontaneidad. Se requería según el diagnóstico elaborado, de una estrategia compuesta por medidas cuyos efectos negativos sobre algunos objetivos fueran compensadas por las otras.

⁸ La necesidad de mantener el empleo obligaba a no intensificar la tecnificación de los minifundios (CONADE, 1970b).

Si bien la relevancia de la empresa nacional era destacada, la derivación de recursos financieros a las firmas nacionales debería ser asignada de acuerdo a criterios de eficiencia. Estas empresas podrían, con ese aporte, equiparse sin retrasar los ajustes salariales. La estrategia combinaba el refuerzo de la inversión con el incremento del consumo vía salarios, junto con el control de precios. La reducción de los aranceles pensada para ganar eficiencia debía hacerse en forma gradual para no afectar el empleo. El riesgo de un desequilibrio entre variables, por ejemplo entre el producto y el salario, debía ser subsanado con una compleja estrategia multisectorial. El sector industrial debería crecer a una tasa del 7% anual, pero concentrado en las industrias básicas, de bienes de capital y exportadora.

El giro nacionalista de la Revolución Argentina

A pesar que en su conjunto, el Plan Krieger había mostrado resultados alentadores, la conmoción política generada por la movilización social primero y luego por la aparición de la violencia política con el asesinato de Aramburu, suscitó una profunda crisis en el régimen militar que derivó en el recambio de su titular y en una reconsideración de su política económica y social. El giro quedó rápidamente identificado con la figura de Aldo Ferrer, quien tenía a mediados de los años '60 una posición destacada como economista⁹, posición desde la que se pronunciaba sobre los problemas acuciantes del momento¹⁰. Ferrer ocupó en el nuevo gabinete de Levingston el Ministerio de Obras Públicas, donde ya haría eje en el mercado nacional y en el aumento de la actividad para contener el aumento de precios¹¹.

La identificación del Ministro de Economía, Carlos Moyano Llerena, con Krieger Vasena, del que había sido asesor, junto a la inestabilidad macro derivó en la designación de Ferrer como ministro del ramo a pesar de que la cúpula militar habría preferido postergar la llegada de Ferrer a Economía. Aquí iba a profundizar la política de fortalecimiento de la empresa local a través de la ley de "Compre Nacional", una idea que ya había expresado

⁹ Agregado comercial en Londres en la Revolución Libertadora en 1956, se incorpora a la UCRI, ministro de economía del gobernador Oscar Alende. Consultor del BID, miembro del comité de los 9 designado por la OEA, integrante de la nómina de expertos del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso.

¹⁰En ocasión del lanzamiento del plan de Estabilización y Desarrollo en marzo de 1967 Ferrer daría una opinión positiva, atento al objetivo de la promoción de la eficiencia industrial. Consideraba correcta la implementación de la devaluación compensada para financiar el gasto fiscal y evitar las presiones alcistas sobre los precios (calculaba que la medida sólo podría generar un impacto de un 5%). Por otra parte, la rebaja de los aranceles compensaba el impacto negativo sobre el costo de insumos y bienes de capital importados. Pero, según el economista, se requería mantener la diferencia de cambio entre las exportaciones manufactureras y primarias en los \$90 durante un período sustancial. Esta situación no sería factible porque estaba prevista la disminución de las retenciones para las exportaciones agropecuarias. Ferrer elogiaba el incremento de la inversión pública, la promoción de la inversión privada, la racionalización de las empresas públicas e incluso la inversión extranjera acompañada de una política monetaria compatible con las necesidades de crecimiento de la economía y de mantenimiento de un alto nivel de ocupación, en un enfoque de la eficiencia que dejaba de ser microeconómico para ser social ("Opinan los economistas...", marzo 1967, p. 14).

¹¹ Las obras públicas presentaban la gran oportunidad para desenvolver el mecanismo ya que por entonces el Estado erogaba por ese concepto alrededor de 2000 millones de dólares anuales ocupando alrededor del 40,4% de la construcción.

como consultor del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. A ella se sumaba, enriquecida por los aportes del físico Jorge Sábato, la propuesta de la alianza de la comunidad científica, el Estado y el sector productivo. Ferrer se encontraba en la línea desarrollista clásica de enfatizar en las industrias de base aunque sostenido en la gran empresa nacional dentro del modelo de economía industrial, integrada y abierta. La relación con Sábato conducía a un camino de tipo coreano, con fuerte énfasis en el desarrollo tecnológico.

Ferrer encontró una fuerte oposición interna en el General Juan E. Guglielmelli, director del CONADE (que había sido candidato al Ministerio del Interior). Identificado con Frigerio, aunque se mostraba benévolo con la inversión de capital extranjero, fue un firme defensor de las políticas de defensa de la empresa nacional. Cuestionaba fuertemente las desnacionalizaciones que según su entender había generado el plan de 1967. Por otra parte, su defensa de la liberalización salarial, que era consistente con las necesidades políticas, no se compadecía con el mantenimiento de las políticas de estabilización en las que había bastante coincidencia. La debilidad de Guglielmelli en la interna militar derivó finalmente en su renuncia¹².

En parte Ferrer se imponía en el cargo por ser el candidato ideal como interlocutor del empresariado nacional, tarea para la que era más apto que el equipo económico encabezado por Carlos Moyano Llerena¹³. Como hemos anticipado, esta propuesta de política económica se enlazaba con una relación diferente con los sectores populares. Una parte del gobierno estimaba que la base del partido de la revolución debían ser los sindicatos reproduciendo el modelo de 1945, una idea que llevó por primera vez desde 1955 a la conmemoración del 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Estos lineamientos iban en la dirección de las propuestas de algunos generales como Carcagno quien miraba con simpatía al régimen peruano del general Velazco Alvarado. Otros, sin embargo, consideraban más apropiada la experiencia nasserista. Cualquiera fuera la línea, había que gestionar un cambio de orientación económica para conseguir una salida política en un plazo largo (“Quien manda ahora”, octubre 1970, pp. 14-18) y esto era imposible sin el apoyo de los sectores obreros. Se trataba de aislar a Perón de sus bases sociales, apoyándose en los sindicatos a través de Luco.

Más allá de las tareas del CONADE, el nuevo elenco del Ministerio de Economía elaboró una propuesta de plan esbozado por Marcelo Diamand y Guido Di Tella para promocionar las exportaciones industriales. La idea central consistía en reemplazar el *draw back* por un

¹² La renuncia de Guglielmelli al CONADE que hiciera en carta pública, el 3 de noviembre de 1970, denunciaba la influencia de los monopolios internacionales en la política gubernamental y sostenía la necesidad de un inmediato aumento de salarios, junto con el fuerte apoyo crediticio a las firmas locales. Su proclama iba en misma dirección de las declaraciones realizadas en ese momento por el ex presidente Onganía. Allí también habría de atacar al ministro Ferrer por ser “un nuevo y sofisticado freno al proceso de la Revolución” (Guglielmelli, 1971, pp. 97-98).

¹³ Incluso se mencionaba al ex ministro peronista Alfredo Gómez Morales para reemplazar a Egidio Ianella en el Banco Central.

subsidio más generoso que lo fijaba en más del doble que aquel para librar la batalla de los mercados vecinos¹⁴. Esta propuesta de Diamand también acercaba al equipo a Cafiero que postulaba la necesidad de crear un Banco de Comercio Exterior para incentivar las exportaciones industriales. Un proyecto que irritaba a los ortodoxos, que lo consideraban una recreación del IAPI pero era una de las principales ideas fuerza de Ferrer¹⁵.

Mientras tanto, con la salida de Guglielmelli del CONADE, se había armado una terna de posibles sucesores, el General Tomás J. Caballero, Alieto Guadagni, candidato de Ferrer y Secretario de Recursos Hídricos y Javier Villanueva¹⁶, que finalmente ocupó el cargo. Era el retorno de los ditellianos para apurar el parto del plan 1971-1975. El desafío consistía en formular un plan creíble que no reprodujera el plan de 1970, al que se lo descalificaba un poco superficialmente por ineficaz¹⁷.

El segundo ensayo en 1970

A comienzos de 1971, un nuevo PND (el 1971-1975) pasaría a ser el programa económico del régimen militar preparado para afrontar una transición a una incierta institucionalidad que se preveía para el próximo quinquenio y anticipaba la línea de impulso a los proyectos de crecimiento de las regiones del interior en respuesta a las demandas del *Cordobazo*. La regionalización de la planificación era la respuesta a esa demanda y eso debía traducirse en una política de obras públicas que pudiera hacer llegar al interior los beneficios del crecimiento.

Esta lectura era compartida por la dirigencia del régimen, que atravesaba por una situación de notable incertidumbre, pero también por los técnicos que participaban de las instituciones públicas y privadas. El PND 1971-1975, surgió de la redefinición de las políticas nacionales que el régimen militar hiciera tras la salida de Onganía y se ubicaba en una posición de tipo nacionalista, contraria a la apertura externa, que dominaban buena parte de la producción económica y sociológica de la época. En este caso, la consulta a los diversos estamentos y organismos del Estado había resultado según sus propias definiciones mucho más significativa. Otra diferencia respecto del plan anterior fue la participación de las oficinas regionales de desarrollo que actuaron de nexo entre el CONADE y las secretarías y el

¹⁴ "Calentando el motor", 1970, Revista *Primera Plana*, num. 406. pp. 25-26.

¹⁵ El estudio se llamó: "Un sistema de cambios exportadores implícitos como mecanismo de promoción de exportación de bienes manufacturados" y fue redactada por una comisión ad hoc integrada por Alberto Fraguío, Diamand y Di Tella. Se proponía crear un sistema de cambios múltiples. La propuesta de exportación industrial llevó a la renuncia del secretario de comercio exterior Elvio Baldinelli ("Exportaciones, eje de la discordia", diciembre 1970, pp. 24-25).

¹⁶ Doctor por California, profesor de Minnesota, Columbia y BA, ex director del centro de investigaciones económicas del IDT, dirigía el área de "Políticas de desarrollo" bajo la gestión de Zalduendo.

¹⁷ "Los Planes de nunca acabar" (1970), *Primera Plana*, núm. 408, p. 25.

CONADE y los ministerios de las provincias. Además ampliaba el abanico de objetivos respecto del anterior, priorizando la educación y la integración interna y latinoamericana. Mantenía el estructuralismo pero le incorporaba un componente más *dependentista*, en la cual se destacaba la concentración monopólica u oligopólica en manos de las empresas transnacionales. Se remarcaba fuertemente en el diagnóstico la pervivencia de un dualismo regional que al agigantarse requería remedios más drásticos; ahí aparece la estrategia del crecimiento polarizado. Aunque el plan global debía tender hacia la convergencia, aparecía como un obstáculo la existencia de sectores monopólicos u oligopólicos en los sectores dinámicos de la economía con acceso a la tecnología y al crédito externo y que tenían un uso intensivo del factor capital. Estas empresas suelen desplazar a las empresas medianas de capital nacional por alcanzar mayores niveles de rentabilidad pero que son más intensivas en el uso de mano de obra.

Ello llevaba a una definición en favor de la integración regional, relegada de las prioridades de la política económica internacional. El concepto de seguridad tan caro a los militares de entonces quedaba incorporado al de desarrollo y pasaba a ser una de sus expresiones. La redacción del documento se presentó también como una nueva manifestación de un régimen que, sin ser democrático, se horizontalizaba a partir de que todos los niveles de la administración participaron de su confección. La inclusión de representantes sociales, que no era nueva, bosquejaba una salida para el régimen que suponía entre otras cosas profundizar el acercamiento al neo peronismo y una búsqueda de un consenso social. El sistema de consulta quedaba institucionalizado para el control de los resultados. Una novedad interesante de la preparación fue la incorporación del lenguaje de computación a través del programa FORTRAN IV desarrollado recientemente por IBM. Justamente basaba en la utilización de la programación y en una afinación de la estadística con la incorporación de los valores de 1970, la mejora de las proyecciones que se contenían.

En cuanto a los objetivos propuestos se enfatizaba la defensa de la soberanía económica en base al fomento de la empresa nacional pero también la distribución de la riqueza y un incremento de las instituciones del Estado de Bienestar. Las previsiones del plan determinaban que el motor del crecimiento se encontraría en el incremento de la inversión bruta a costa de una baja relativa del empleo público, cuya dotación debería mantenerse aún en un contexto de crecimiento del producto. Otra novedad presentada respecto de los anteriores documentos de planificación fue la relevancia otorgada a la tecnología nacional, a partir del concepto de dependencia tecnológica que generaba un drenaje de divisas hacia los países desarrollados, como una incorporación de técnicas que no se correspondían con el medio local, ya que estaban pensadas para escalas mayores.

De todas formas, los redactores del plan demostraban las dificultades que implicaba el crecimiento con distribución del ingreso con ese nivel de exportaciones e importaciones, lo que obligaba a un incremento significativo del ahorro interno y externo, el aumento de la

productividad, el crecimiento de las industrias de base y la apertura de la economía con la integración regional.

La tasa anual promedio proyectada era del 8% anual, un valor evidentemente muy alto para el contexto económico mundial y para la situación político-social del país. Estos valores eran explicados en gran parte por el papel creciente que se le adjudicaba a la inversión pública en la construcción de infraestructura económica (energía, comunicaciones, vialidad) y social (salud, educación, vivienda). Ese alto ritmo de crecimiento procuraba incrementar el ritmo de suba del salario y disminuir la desocupación estructural.

El aumento del salario real no afectaría la rentabilidad de las grandes empresas ya que el aumento de costos sería compensado por la disminución de las tasas de interés consecuencia de la reestructuración del mercado de capitales. Los aumentos salariales deberían estar segmentados sectorial y regionalmente pero un programa ad hoc se encargaría de la reducción progresiva de las diferencias. Las pequeñas y medianas empresas serían compensadas con incentivos tecnológicos y financieros y en parte serían estimuladas también a la concentración, para disminuir sus costos. Pero también ese sector del empresariado nacional estaría apoyado por un ente específicamente destinado a sostener y expandir la participación del capital nacional en la industria manufacturera. Además, estaban previstos la creación del Banco Nacional de Desarrollo, y planes sectoriales de reconversión industrial, de Inversión Pública para el crecimiento de la infraestructura, de modernización agrícola y creación de Polos Nacionales de Desarrollo.

Un aspecto clave que incorpora el plan respecto de las experiencias previas es la reforma financiera que incluía una “nacionalización” de la banca por efecto de la disminución de la participación de la banca extranjera en el total de depósitos y préstamos. De acuerdo a los autores del plan, la creciente privatización y desnacionalización de la banca comprometían la capacidad del banco central de orientar el crédito en favor de la producción. En primer lugar se preveía una liberación de las tasas pasivas para captar el ahorro y por el otro, se buscaría la forma para orientar el 50% del crédito a plazos mayores a los dos años, buscando derivar del consumo a la inversión.

Respecto del sector externo, las previsiones positivas respecto de las exportaciones de manufacturas se veían acompañadas por las perspectivas de sustituir importaciones de hierro a partir de la entrada en funcionamiento de Sierra Grande, además de la sustitución de compras externas de aluminio y de productos químicos como el carbonato de calcio, cuya demanda interna sería satisfecha con producción nacional al final del período. Un dato clave reside en que el coeficiente global de importaciones sería mayor en 1975 que en 1971.

La planificación regional y sus problemas

La planificación regional en América Latina ha sido un tópico de importancia en la literatura que ha discutido fundamentos y resultados. En términos generales, la descentralización de la toma de decisiones era una reacción normal ante la concentración de los sistemas de asignación de recursos del poder político y las inequidades del crecimiento económico. (Riffo, 2013; Rofman y García, 2012).

Pero, ¿cuál debía ser el contenido específico de la política promocional? ¿En qué sectores productivos afincar las inversiones? ¿Cuáles serían los centros destinados a captar la inversión?

Como hemos visto, los fundamentos de la planificación autoritaria partían de los conceptos de la teoría del desarrollo y del estructuralismo. La acentuación sobre las desigualdades socio-espaciales era un aspecto esencial de este concepto. El concepto de Arthur Lewis de la oferta ilimitada de trabajo y de división entre un sector capitalista y otro de subsistencia, eran herramientas útiles para entender procesos regionales. El estancamiento secular de muchas regiones, podía ser resuelto por el progresivo traslado de trabajo hacia el sector moderno local que conduciría finalmente a una convergencia de productividad e ingresos según la fórmula lewisiana. Los nuevos abordajes de los problemas del subcontinente ayudaban a distintas implementaciones.

Desde fines de la década del '40 el problema del desarrollo regional en América Latina se concebía en forma intrarregional partiendo de las cuencas hidrográficas. Desde los años '60 comenzaron a incorporar una mirada interregional, en la cual el retraso de algunas regiones se vinculaba a la dinámica del sistema de regiones como un todo. Además, comenzaron a identificarse leyes espaciales, a partir del trabajo con modelos matemáticos sofisticados, provenientes principalmente del campo de la economía. Estos enfoques interpretaban la relación sociedad-espacio desde una perspectiva cuantitativa y de forma altamente abstracta, dentro de un marco deductivo y nomotético. La incorporación formal de la planificación regional a la agenda de desarrollo de la CEPAL se produce en 1970, con la creación del Curso de Planificación de Desarrollo Regional dentro de las actividades de capacitación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES).

De esta forma la región devino en un “contenedor” natural de la planificación, considerando la responsabilidad del Estado en la asignación espacial de las inversiones ante mecanismos de mercado que tienden a valorizar aquellos sub-espacios que han acumulado mayores economías externas. La política pública debía alterar las relaciones de precio para que los factores de localización se reorienten hacia metas explícitas fijadas.

La actividad planificadora de ese momento estaba permeada por la influencia de la teoría de los Polos de Desarrollo que fuera formulada por F. Perroux y que sufriera impugnaciones y

debates. Algunos especialistas impugnaban la posibilidad de efectos multiplicadores de un Polo en un hinterland carente de una trama productiva. También advertían vaguedades en la misma definición (Barrera, 1970). Su concepción de industrias motrices suponía una priorización notable del sector industrial.

Si bien había habido varios ensayos de planificación regional bajo el peronismo histórico, estas reflexiones teóricas servían para intentar superar los problemas de desequilibrios regionales y de concentración económica y poblacional. La planificación era pensada como sustituto parcial del mercado en la asignación de recursos, racionalización del proceso de toma de decisiones del sector público, generación de orientaciones de mediano y largo plazo y método de formación técnica. Esta diversidad de funciones resultaba más atractiva para la amplia esfera de los espacios territoriales a fin de corregir desequilibrios que el proceso de industrialización sustitutiva había agravado.

Se imaginaba así una planificación que fuera de afuera hacia adentro, esto es, de la periferia al centro de decisión. Esta operatoria ya sería en sí misma una contribución positiva a la gestión de la política pública cuyo objetivo básico consistía en modificar la dinámica poblacional. En las regiones más antiguas el objetivo básico consistía en detener la sangría demográfica. En las más nuevas, sumar poblaciones provenientes de las áreas centrales. La premura estaba dada por la nueva situación de protesta de la población que aparecía mucho más explosiva en las provincias del interior. Si bien consideramos que la planificación estaba entre los presupuestos políticos del régimen, y subyacía en los “tiempos”, el *Cordobazo* tuvo un efecto dinamizador de este movimiento. Así, pocos meses después del estallido cordobés, en septiembre de 1969, se dispuso la creación de la Región Noroeste a través de la Junta de Gobernadores (Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy). En la formación de dicha junta se contó con la asistencia del subsecretario del CONADE, Héctor Diéguez y del Director de la Oficina Regional, una de las pocas que funcionaba eficazmente, Jorge Sansberro¹⁸.

El CONADE ya tenía una acumulación significativa de estudios sobre las regiones desde mediados de la década. Pero, aunque habían comenzado a organizarse algunas reparticiones especializadas ad hoc como la del Noroeste y la Metropolitana¹⁹, el PND 1970-1974 se

¹⁸ Se trataba de vincular las áreas de desarrollo con las zonas de explotación de recursos naturales y mercados mediante el acondicionamiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones. En general se trataba de enunciados sin medidas prácticas que mostraba una preocupación del régimen por corregir desequilibrios. (CONADE, 1969)

¹⁹ En octubre de 1967 se creaba la Oficina Regional Metropolitana, entre Rosario y La Plata, cuyo objetivo era estudiar el funcionamiento de la realidad espacial con enfoque administrativo, (residencia de autoridades, ministerios y reparticiones), territorial y estructural. La síntesis preliminar del estudio de esta oficina se elaboró en ocasión de la visita de R. Mc Namara, presidente del BIRF, en octubre de 1968, ante el cual se gestionarían préstamos para el desarrollo de infraestructura. Se advertía el agotamiento de la capacidad de crecer del sector industrial en la zona metropolitana y la subutilización del sector de servicios. El proyecto de transporte, fue elaborado en colaboración de expertos franceses y técnicos de las secretarías de Obras Públicas y Transporte. La Misión de Cooperación Técnica de Francia desarrollaría un intenso programa de trabajo durante el año 1969, consistente en dos expertos en urbanismo que harían tres viajes anuales, de tres semanas cada uno. Tres expertos en transporte, tres semanas cada uno, un experto en equipamiento para el esparcimiento

lamentaba por el retraso en la organización de las Oficinas Regionales de Desarrollo cuya ausencia la vedaba de un insumo y de un agente clave para la fiscalización de los programas. De esta forma, no contenía en sus previsiones un apartado específico en los que se resaltarán objetivos regionales y locales.

En contraste, el PND de 1971 proponía la creación de "regiones de desarrollo" coordinadas por una "oficina regional de desarrollo". En estas se pondría atención a la dinámica funcional del espacio, es decir, a las corrientes de intercambio interno que deberían ser priorizadas en la formulación de los objetivos de radicación de inversiones y población. Dentro del conjunto, se potenciaban algunas zonas claves, como la del Comahue, privilegiada por su potencialidad hidroeléctrica (Oficina Regional Comahue, julio 1970 y Oficina Regional de Desarrollo Comahue, agosto 1970) y otras como el noroeste que arrastraban más de un siglo de estancamiento relativo. Aquí, el objetivo prioritario se encontraba en una agricultura en la que predominaba una gran ineficiencia técnica y productiva. Esta era el objetivo central de la oficina regional de Desarrollo del NOA, dirigida por el ya mencionado Sansberro (Oficina Regional de Desarrollo del Noroeste, 1970). Otra prioridad regional se encontraba en la Patagonia. En primer lugar, la baja densidad demográfica la convertía en destinataria ideal de las migraciones de las provincias expulsoras. Por otra parte, los conflictos limítrofes que la bordeaban la hacían epicentro de las hipótesis de conflicto militar. Esta relevancia estratégica explicaba el interés por su desarrollo económico, asociado en última instancia a ramas con valor militar, como la del aluminio que empezaba a planificar en Puerto Madryn, en la que tenía interés profesional la Fuerza Aérea. También el plan contemplaba el crecimiento minero, forestal y turístico. Era notable la significación de la inversión pública y de la conducción estatal de la economía en los proyectos así esbozados (Oficina de Desarrollo Regional Patagonia, 1968, pp. 246-250).

En síntesis, para alcanzar sus objetivos a nivel regional, el PND 1971 definió ocho Regiones Nacionales de Desarrollo que comprendían integralmente a las provincias. Por fuera de esos límites, precisó seis Polos Nacionales de Desarrollo que abarcaban espacios pluriprovinciales en el NOA, NEA, Comahue y Patagonia²⁰. Esta definición espacial mostraba que excedía la idea de una instalación industrial que irradiara efectos sobre un hinterland que se beneficiaría de los encadenamientos que produjeran.

un viaje de dos semanas y un experto en parques industriales y empleos terciarios, un viaje anual de tres semanas (CONADE, 1967, pp. 10-11).

²⁰ Estos Polos Nacionales de Desarrollo fueron: Salta-Jujuy, Güemes-San Pedro, Corrientes-Resistencia, Posadas-Oberá-Santo Tomé, Zapala-Neuquén-Alto Valle, Madryn-Sierra Grande-Trelew-Rawson y Río Gallegos-Río Turbio. A estos polos se les sumaban dos áreas de promoción más localizadas que eran Comodoro Rivadavia y Tucumán.

Conclusiones

La ideología planificadora, entendida como un método de la asignación de recursos por parte del Estado, integraba el conjunto de convicciones que rodeaban a los integrantes del régimen militar de la Revolución Argentina desde 1966. Planificar estaba dentro del modelo de gestión del gobierno. El principal órgano de planificación fue en esa instancia el CONADE, que tuvo una importante producción de estudios con vistas a la ejecución de planes. En esta tarea también colaboraban organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las oficinas regionales de planificación. Con todo, durante el apogeo de este régimen (1966-1969) los equipos económicos evitaron avanzar en la planificación para no quedar atados a objetivos predeterminados de largo plazo, ocupados sobre todo en normalizar, es decir, estabilizar la economía.

En los años 1970-1971 se activó la “consciencia dormida” de la planificación y en poco tiempo son presentados dos Planes Nacionales de Desarrollo. ¿Qué motivó esta activación? En ese momento singular en que aparecía en el horizonte el “tiempo político” de la transición democrática, la élite militar propuso otorgar mayor relieve a la propuesta de planificación, como herramienta de acuerdo con el empresariado y los trabajadores. Se imponía una política económica que pudiera ampliar el consenso social hacia la política pública.

Desde el punto de vista teórico, el estructuralismo económico latinoamericano proveía la herramienta apta para propiciar un proceso de intervención estatal con sentido de integración económica, social y política con el apoyo de economistas y especialistas en desarrollo. De acuerdo a la lógica sustitutiva dominante, las soluciones propuestas se encaminaban a una industrialización que rompiera los diques de la restricción externa.

Pero en verdad los desequilibrios afectaban a una amplia gama de actividades y se requerían también la planificación a escala menor, que no sólo tuviera en consideración las cuentas externas. El agravamiento de las tensiones inter e intrarregionales debía ser corregido para frenar el despoblamiento de amplias áreas provinciales. Las regiones del interior requerían según la óptica dominante no sólo la instalación de polos industriales sino también el impulso a las actividades primarias y fundamentalmente el desarrollo de una infraestructura de transporte de tal forma que permitiera la ampliación de los mercados nacionales para las producciones locales. Si bien no se dejaba de lado la perspectiva autoritaria, el régimen ponía en marcha un mecanismo novedoso con una mirada integral de los problemas nacionales, a tono con las propuestas que provenían de los centros de estudios como la CEPAL.

Bibliografía

Barrera, C (1970), *Bases para una política regional en la Argentina*, Buenos Aires, CONADE.

CONADE (1967), *Desarrollo de las tareas de la oficina de la región metropolitana*.

CONADE (1969), *Resoluciones de la II Junta de Gobernadores de la Región de Desarrollo Nor-Oeste*.

CONADE (1970b), *Exposición sobre el PND 1970-4*.

Diamand M. (1973), *Doctrinas Económicas, desarrollo e independencia*, Buenos Aires, Paidós.

“Exportaciones, eje de la discordia” (diciembre 1970) *Primera Plana*, 409.

García Heras R. (2008), *El Fondo Monetario y el Banco Mundial en la Argentina*, Buenos Aires, Lumiere.

González Bollo H. (2014) “Exploraciones sobre la Argentina planificada (1944-1972)” *Anuario del Instituto de Estudios Históricos y Sociales*; Tandil vol. 29, pp. 119-124.

Guglielmelli, JE., (1971) *120 días en el gobierno*, Buenos Aires, edición de autor.

Malraux A., (1968), *Antimemorias*, Buenos Aires, Sur.

Martner Fanta R. y Máttar J. (1968), *Los fundamentos de la planificación en América Latina*, Santiago de Chile, ILPES/CEPAL.

Oficina Regional de Desarrollo Comahue, (febrero 1969) *Caracterización de la región Comahue*, CONADE, Neuquén.

Oficina Regional Comahue, (julio 1970) *Análisis y diagnóstico regional*, CONADE, Neuquén.

Oficina Regional de Desarrollo Comahue, (agosto 1970), *Rol que le correspondería a la región Comahue*, CONADE, Neuquén.

Oficina de Desarrollo Regional Patagonia, (1968) *Análisis y diagnóstico de la región desarrollo Patagonia. Plan Tentativo Regional*, CONADE, s/d.

Oficina Regional de Desarrollo del Noroeste (1970), *Proyección de la oferta agrícola al año 1980*, CONADE.

Onganía J. C., (1967)

“Opinan los economistas. Ferrer: La devaluación sólo afectaría en pequeña proporción el costo de la vida”, (marzo 19 de 1967), diario *Clarín*. Buenos Aires.

Oztrak O., (1980) “Estado, planificación y burocracia. Los “procesos de implementación” de políticas públicas en algunas experiencias latinoamericanas”, *Estudios CEDES*, vol. 3, N° 2. Buenos Aires.

“Quien manda ahora”, (octubre 20 de 1970) *Primera Plana*. Buenos Aires.

Rofman A imaginar García A., (2012), “Planificación regional: recuperación y desafíos para la agenda pública argentina” *Ensayos de Economía*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Riffo L.P. (2013) *50 años del ILPES: evolución de los marcos conceptuales sobre el desarrollo territorial*, CEPAL, Santiago de Chile.

“Se necesita un cambio de actitud sobre los problemas económicos” (julio 5 de 1966) *Economic Survey*, num. 1042. Buenos Aires.